

En Buenos Aires, a los 26 días del mes de septiembre del año dos mil uno, sesionando en la Sala de Plenario del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación, con la Presidencia del Dr. Diego J. May Zubiría, los señores consejeros presentes

VISTO:

El expediente 139/01, caratulado "L. T., M. c/ titular del Juzgado Civil N° 106 - Dra. Myriam Rustan de Estrada", del que

RESULTA:

I. El Sr. M. L. T. denuncia a la Dra. Myriam Rustan de Estrada, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106, por su actuación en los expedientes caratulados "V., N. M. C. c/ L. T., M. s/ incidente - familia (susp. rég. de visitas)" (autos 64.556/98) y "L. T., M. c/ V., N. M. C. s/ denuncia por violencia familiar" (autos 112.310/00). El interesado imputa a la magistrada "incumplimiento de los deberes de funcionari[o] públic[o]; por ser integrante de una asociación ilícita(...); y por infracción a la ley 24.270, por obstruir el contacto de los menores con [él], ya que desde hace 6 años que [le] impiden verlos y también tener contacto telefónico con ellos" (fs. 2).

II. Sostiene que "(s)e configura en el caso el delito de incumplimiento de los deberes de funcionari[o] públic[o] por no tomar en cuenta(...) que N. M.C. V., madre de los chicos, no se ocupa de los problemas de salud de [los niños]", quienes padecerían trastornos de índole psicológico y no efectuarían tratamiento alguno por ese motivo.

Manifiesta que el psiquiatra -designado de oficio-advirtió al juzgado de esta situación de riesgo pero la jueza "no tomó ni toma medidas para salvaguardar la integridad física y mental de los menores".

Refiere que en el expediente caratulado "L. T., M. c/ V., N. M. C. s/ denuncia por violencia familiar" (autos 112.310/00), no tomó en cuenta que su hija fue objeto de abuso por la pareja de su madre quien, según afirma, es una persona que tiene en Israel "un pedido de captura por la violación de una nena de 8 años y otro en la Provincia de Santa Fe,

Juzgado Federal N° 3".

III. Indica que nunca se hizo lugar a las pretensiones que formulara para poder visitar a sus hijos en ocasiones como sus cumpleaños, bautismos, etc., rechazándolas siempre sin motivos. También alega que la negativa de la jueza se extendió al pedido que efectuó para mantener un régimen de visitas en el llamado "Encuentro de Padres e Hijos" dependiente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que se realiza en el Jardín Japonés los días sábados por la mañana y que, por sus características, no implica riesgo alguno para la salud tanto física como mental de sus hijos menores.

IV. El presentante señala que se configura en el caso una "asociación ilícita" entre la magistrada y el Sr. J. J. V. -su suegro- debido a que ha visto a la jueza saliendo dos veces de la casa del Sr. V. y que también ha comprobado que la perito psicóloga designada por el juzgado, M. C. B., y su ex esposa mantuvieron contactos telefónicos antes, durante y después de su designación en la causa y que ambas tienen alguna vinculación de amistad.

Relata que el 5 de julio del año 2000 la magistrada ordenó su desalojo de las viviendas de la calle ... y ... para que vivieran allí su esposa e hijos. Considera que no había razón para adoptar esa medida pues su esposa "posee gran cantidad de propiedades".

V. Destaca que "existe un soborno generalizado por parte del Sr. J. J. V., [su] suegro, y otros, que dificulta el normal desarrollo de las causas que inici[ó]. Sobornó a abogados(...), también a funcionarios, psiquiatras, testigos, etcétera, que en su momento denunci[ó]" (fs. 3).

Finalmente, manifiesta que se ha configurado en el obrar de la magistrada una infracción a la ley 24.270 por obstruir el contacto de los hijos con su padre. Ofrece como prueba documental los expedientes caratulados "V., N. M. C. c/ L. T., M. s/ incidente - familia (susp. rég. de visitas)" (autos 64.556/98); "L. T., M. c/ V., N. M. C. s/ denuncia por violencia familiar" (autos 112.310/00); "L. T., M. c/ V., "L. T., M. V. y L. T., F. M. s/ protección de personas" (autos 64.176/99) -todos en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106- además de otros expedientes en trámite ante los juzgados

criminales de la localidad de Morón (Provincia de Buenos Aires).

CONSIDERANDO:

1º) Que no obstante los confusos términos de la denuncia presentada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del Reglamento de la Comisión de Acusación, se examinaron las actuaciones mencionadas por el presentante, en trámite ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106 de la Capital Federal. La medida se realizó a fin de comprobar la veracidad de las imputaciones formuladas en relación con la actitud de la magistrada, respecto de la protección de la salud física y mental de los hijos menores de edad, como así también de la alegada parcialidad en el juzgamiento de las cuestiones traídas a su conocimiento.

2º) Que, del examen del expediente caratulado "V., N. M. C. c/ L. T., M. s/ incidente - familia" (autos 64.556/98) resulta que, el 6 de marzo del año 2000, la Dra. Rustan de Estrada suspendió provisoriamente y por el plazo de cuarenta y cinco días el régimen de visitas entre el Sr. L. T. y sus hijos menores, hasta que el primero acreditara en autos la realización de los tratamientos psicoterapéuticos y psicofarmacológicos recomendados por el Cuerpo Médico Forense en su dictamen pericial del 28 de diciembre de 1999 (fs. 207).

En la pericia médica -ordenada por el Juzgado Nacional en lo Correccional N° 13- se indicaba la necesidad de que se realizaran los tratamientos aludidos, aconsejando también que en caso de que el Sr. L. T. no los cumpliera, debía ser internado. A esos efectos, la magistrada resolvió remitir las actuaciones al Cuerpo Médico Forense para que lo citara e indicara si se encontraba comprendido en las previsiones de los artículos 141 o 152 bis del Código Civil, si debía realizar tratamiento psicológico y si estaba en condiciones de tener un régimen de visitas con sus hijos. En caso afirmativo, si debía ser o no controlado por terceros (fs. 409/410 vta).

En el informe del Cuerpo Médico Forense, del 18 de junio del año en curso, se determinó que el Sr. L. T. presenta "un trastorno paranoide de la personalidad proclive a las descompensaciones

impulsivas [que] debe seguir un tratamiento psicoterapéutico [y que] si cumple [con esa indicación] se encuentra en condiciones de tener un régimen de visitas con sus hijos controlado por terceros" (fs. 439/440).

3º) Que de la compulsión de las actuaciones mencionadas por el denunciante -y de otras conexas que no indica, pero que fueron examinadas, como los expedientes caratulados "V., N. M. C. c/ L. T., M. s/ denuncia por violencia familiar" (autos 93.348/96); "V., N. M. C. c/ L. T., M. s/ medidas precautorias" (autos 79.483/97) y "L. T., M. s/ art. 482" (autos 46.284/01)-no surgen las conductas irregulares que el presentante atribuyó a la Dra. Rustan de Estrada. Contrariamente a lo denunciado, se observa que la magistrada ajustó a derecho su actuación y mantuvo una conducta cautelosa en cuanto al régimen de visitas de los menores y a la exigencia de que su padre -antes de iniciar los encuentros- concluya el tratamiento terapéutico aconsejado.

Tampoco surge que la Dra. Rustan de Estrada incurriera en alguna de las conductas que el presentante le imputa, como la de obstruir el contacto con sus hijos menores o conformar una "asociación ilícita" junto al padre de su esposa y a la perito psicóloga designada en las causas, resultando infundadas las afirmaciones del interesado.

Asimismo, del expediente caratulado "L. T., M. s/ art. 482" (autos 46.284/01) se observa que en el informe producido el 21 de mayo de 2001 por el Cuerpo Médico Forense se concluye que el denunciante es portador de "un (t)rastorno (p)aranoide de la (p)ersonalidad(...), es inusual las personas que denuncia (32 personas), más aún cómo establece relaciones, eventuales parentescos, y que todo se cierna sobre el actor a los efectos de perjudicarlo. En consecuencia el mismo ejerce la defensa, hasta sus propios ex abogados denuncia como integrantes de esa asociación ilícita(...)" (fs. 56/58).

Las conclusiones del informe suscrito por el Dr. J. L. C. indican que las facultades del Sr. L. T. "al momento del examen, no guardan los parámetros compatibles con la normalidad(...) no se halla en condiciones de comprender sus actos y dirigir su accionar(...) no se encuentra en capacidad de denuncia".

4º) Que en consecuencia, no configurándose por parte de la magistrada cuestionada alguna de las causales de remoción previstas por el artículo 53 de la Constitución Nacional, corresponde -de conformidad con lo propuesto por la Comisión de Acusación (dictamen 79/01)- desestimar la denuncia.

Por ello,

SE RESUELVE:

1º) Desestimar el pedido de apertura del procedimiento de remoción de la Dra. Myriam Rustan de Estrada, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 106 de la Capital Federal.

2º) Notificar al denunciante y a la magistrada denunciada, y archivar las actuaciones.

Regístrese.

Firmado por ante mí, que doy fe.

Fdo.: Bindo B. Caviglione Fraga - M. Lelia Chaya - Javier E. Fernández Moores - Angel F. Garrote - Juan C. Gemignani - Juan M. Gersenobitz - Margarita A. Gudiño de Argüelles - Claudio M. Kiper - Diego J. May Zubiría - Eduardo D.E. Orio - Humberto Quiroga Lavié - Alfredo I.A. Vítolo - Pablo G. Hirschmann (Secretario. General)